

Propuesta de Resolución que se eleva al Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del mismo Órgano de fecha 13 de julio de 2012, que aprueba los criterios para la elaboración del Plan de Organización Docente del curso académico 2012-2013.

Visto el recurso interpuesto por la Confederación Sindical de CCOO de Andalucía contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2012, en virtud del cual se procede a la aprobación de criterios para la elaboración del Plan de Organización Docente del curso académico 2012-2013 (BOUCA de 27 de julio) y con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en sesión celebrada el 13 de julio de 2012, en el punto 12 del Orden del Día, aprobó los criterios para la elaboración del Plan de Organización Docente del curso académico 2012-2013.

Segundo.- La Confederación Sindical de CCOO de Andalucía, impugnó el citado Acuerdo, solicitando, además, la suspensión del mismo.

Tercero.- Por resolución del Rector de 13 de septiembre de 2012, se desestimó la petición de suspensión cautelar del Acuerdo recurrido al no apreciarse la concurrencia de ninguno de los motivos previstos legalmente para ello, quedando pendiente la resolución del fondo del asunto en la forma que ahora se propone.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo; Estatutos de la Universidad de Cádiz; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Segundo.- Se dan por reproducidos los argumentos de hecho y de derecho contenidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno que se recurre y para evitar innecesarias reiteraciones se da íntegramente por reproducido.

El recurso impugna el citado Acuerdo tanto en lo relativo al personal docente funcionario como al laboral.

Por lo que se refiere al primero, esto es, al personal docente funcionario, el acuerdo del Consejo de Gobierno aplica lo establecido en el art. 68.2 de la LOU, en su actual redacción introducida por el Real Decreto-Ley 14/2012:

“Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 créditos ECTS.

No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en función de la actividad investigadora reconocida de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones

del profesorado universitario, y que haya dado lugar a la percepción del complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo, y atendiendo a las siguientes reglas:

a) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 16 créditos ECTS quien se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de Escuelas Universitarias o Catedráticos de Escuela Universitaria con tres o más evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.

- Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.

- En todo caso, cuando se hayan superado favorablemente cinco evaluaciones.

b) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 32 créditos ECTS, quien se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de actividad investigadora o que haya obtenido una evaluación negativa de dicho período.

- Que hayan transcurrido más de seis años desde la última evaluación positiva.”

En perfecta armonía con la modificación legal, por acuerdo del Consejo Andaluz de Universidades de 13 de junio de 2012, con relación al régimen de dedicación del profesorado contemplado en el del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, se acordó, por unanimidad:

“1. Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo tendrá una dedicación de hasta 240 horas de docencia presencial anuales.

2. El profesorado recogido en el apartado 2.a) del citado RDL tendrá una dedicación de hasta 160 horas de docencia presencial anuales.

3. El profesorado recogido en el apartado 2.b) del citado RDL tendrá una dedicación de hasta 320 horas de docencia presencial anuales.

4. Tomando como premisa la garantía del cumplimiento del encargo docente asignado a cada departamento o área de conocimiento, cada universidad establecerá medidas de modulación que minoren el encargo docente del profesorado, atendiendo a la realización de actividades académicas, de gestión y de I+D+i.

La nota de 12 de julio de 2012 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte indica que la LOU reconoce expresamente la competencia de las Universidades para establecer el régimen de dedicación del PDI, y que, al ejercerla, deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa aplicable, es decir, a las reglas que fija el art. 68.2 de la LOU.

Tras establecer con carácter general la parte de la jornada que se dedica a actividad docente del personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, la LOU especifica que *“la dedicación a la actividad docente podrá variar en función de la actividad investigadora reconocida”*. Es decir, que el régimen general podrá ser variado, por quien tiene competencias para ello (artículo 32 LCIT), en función de los criterios que fija el art. 68.2 de la LOU. A este respecto, el art. 68.2 LOU establece unos intervalos de dedicación, fijando un suelo mínimo para el personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios que tiene mayor actividad investigadora reconocida, y un techo máximo, para la parte de dicho personal que no la tiene.

En definitiva, el acuerdo impugnado no es más que la aplicación a nuestra Universidad de lo establecido en normas de rango superior como muy bien enumera tanto el recurrente como el acuerdo recurrido y, como consecuencia, la supuesta inconstitucionalidad denunciada no desmerece su legalidad, al menos en este momento y en tanto no se declare la hipotética inconstitucionalidad de las normas habilitantes. A mayor abundamiento, la literalidad del acuerdo que se recurre es meridianamente clara y su redacción no permite afirmar, como se hace en el recurso, que tanto el Consejo Andaluz de Universidades como la propia Universidad de Cádiz hayan optado por aplicar imperativamente la máxima carga docente a su profesorado funcionario. Muy al contrario, en todos los casos se establece como límite. Las expresiones “hasta 16 créditos” o “hasta 32 créditos” son bien elocuentes de la inexistencia de ese tope máximo imperativo al que se alude en el recurso. Y, si lo anterior no fuere suficiente, debemos afirmar que también se beneficia con la asignación general de 24 créditos tanto a quienes hayan tomado posesión en el último año como a los que han solicitado una evaluación de su actividad investigadora antes del 31 de diciembre de 2011. Por tanto, resulta acreditado que la Universidad de Cádiz no sólo no ha adoptado automáticamente la asignación máxima prevista en el artículo 68.2 de la LOU para cada grupo de funcionarios docentes sino que ha adoptado un acuerdo que además beneficia a determinados colectivos inicialmente no contemplados en el citado artículo.

Tercero.- Con respecto a la dedicación docente del personal docente e investigador laboral el Consejo Andaluz de Universidades acordó lo siguiente, también por unanimidad:

1. *El profesorado ayudante doctor, dada su condición de personal en formación con contrato temporal, tendrá una dedicación de 240 horas de docencia presencial anuales.*
2. *El profesorado colaborador y contratado doctor, durante el próximo curso académico, y hasta tanto no puedan ser evaluados en su actividad investigadora por la CNEAI, tendrán una dedicación de hasta 320 horas de docencia presencial anuales, siéndoles de aplicación lo que se disponga en cada Universidad con respecto a las minoraciones docente referidas en el punto 4.”*

Es evidente que el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, como señala la nota del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 2 de julio de 2012, no modifica directamente su asignación docente. Sin embargo, la modificación acordada es una consecuencia inevitable de lo previsto en el artículo 26.1 y 2 del Convenio Colectivo del personal docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía, precepto en el que podemos comprobar que las obligaciones docentes de este personal se establecen por remisión a la que corresponda en cada momento a los profesores titulares de universidad con dedicación a tiempo completo. Y como esta dedicación docente de los profesores titulares de universidad se ha modificado por la Universidad de Cádiz al amparo de una norma con rango de Ley, la

consecuencia es clara e inevitable. Incluso la UCA, en el acuerdo recurrido, ha tenido muy presente que se trata de personal en formación, y ha establecido un régimen de dedicación docente más favorable que el que resultaría de la aplicación de su propio convenio colectivo, y ello atendiendo a su promoción futura e incorporación definitiva como profesores funcionarios.

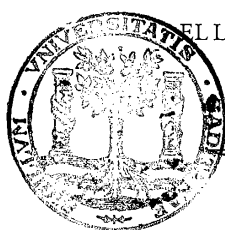
Por último, cabe indicar que la Universidad de Cádiz cuando establece las pautas impugnadas sobre dedicación docente lo hace no sólo en aplicación de la nueva redacción del artículo 68.2 de la LOU, sino también en atención a otros condicionantes legales. Así, y como es conocido, a partir de finales del pasado año y a través de la fórmula de los Reales Decretos-Leyes, se han promulgado normas que impiden la convocatoria de nuevas plazas más allá de los estrechos límites de una tasa de reposición del 10% que en el caso de la UCA ha podido ser superada en el presente año. Se debe tener en cuenta también el importante número de profesores que se jubilaron anticipadamente el 30 de septiembre de 2011 al amparo del entonces vigente incentivo a la jubilación anticipada. Por consiguiente, no podemos estar de acuerdo con la afirmación del recurrente cuando manifiesta que la UCA puede o no, aplicar el tan citado Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril. En absoluto podemos llegar a esa conclusión. Las universidades públicas están obligadas a prestar el servicio público de la educación superior dentro del marco legal y a adoptar los acuerdos necesarios para hacerlo posible. No se entendería que no se adoptaran las decisiones oportunas a tal fin y con perjuicio de tan esencial función. Y sobre tales decisiones convergen una serie de normas imperativas como la congelación de plantillas o tasas de reposición del 10%, reducción de salarios, congelación del Cap. 1, incremento de horas docentes, etc., que tienen un origen concreto y superior.

Por todo ello, se propone: **DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN** interpuesto por la Confederación Sindical de CCOO de Andalucía contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha de 13 de julio de 2012, en virtud del cual se procede a la aprobación de criterios para la elaboración del Plan de Ordenación Docente para el curso académico 2012-2013 (BOUCA de 27 de julio).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta propuesta, de resultar aprobada y adoptar la naturaleza de resolución agota la vía administrativa y será impugnabile en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como establece el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 a) en relación con el artículo 8.2 a) de la Ley 29/1998 citada.

Cádiz, a 20 de septiembre de 2012.

EL LETRADO-JEFE DEL GABINETE JURÍDICO



Fdo.: Diego Torres Rodríguez.

GABINETE JURIDICO